

Nicolle Peña

**Q**uince minutos de tensión hubo en el concejo municipal de Maipú el jueves pasado. Terminada la tabla ordinaria, el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), ofreció la palabra.

Lo aprovechó el concejal republicano Edison Aguilera, preocupado por la no renovación de contrato a cerca de 250 personas a honorarios: "Los trabajadores en muchos casos no tienen claro si el término de contrato se dio por desempeño, por una baja de presupuesto, porque la función se elimina o simplemente se está aprovechando de liberar cupos para poder recibir a personal del gobierno saliente", lanzó.

La intervención irritó al político mejor evaluado del FA, quien respondió "con mucho respeto", como dijo: "Yo no sé si eso lo escribieron, pero es por lejos la intervención más ignorante y mala leche que le he escuchado en este Concejo (...). Que se nos acuse de estar sacando gente para luego ingresar operadores políticos es algo que no puedo aceptar".

Junto a ello defendió que la municipalidad tiene el deber de ver cómo utiliza el gasto, teniendo la potestad de no renovar honorarios "porque quiere hacer uso de ese recurso en algún otro fin, que puede ser contratar personas en otra área".

Sin embargo, exministros que vivieron el cambio del Gobierno de Michelle Bachelet al de Sebastián Piñera, sostienen que el paso de funcionarios del Ejecutivo a gobiernos locales es una realidad y podría ser aún mayor al término de la administración de Gabriel Boric. Esto, debido al escenario más estrecho de lugares que típicamente recibían a personeros del sector, como fundaciones y universidades.

De hecho, la periodista y jefa de gabinete del alcalde Vodanovic, Emilia Malig (Frente Amplio), se desempeñó hasta agosto del año pasado como responsable de la estrategia comunicacional de la Segob y coordinadora de los equipos de contenido de prensa y digital del gabinete de la ministra vocera, Camila Vallejo.

#### La "retaguardia"

Mientras funcionarios de confianza política ya iniciaron la búsqueda de trabajo en el sector privado, otros tienen más claro el camino a seguir. Es el caso de autoridades que antes de asumir en sus cargos trabajaban en universidades, como la ministra de la Mujer, Antonia Orellana en la U. de Chile. "La única consecuencia material que tenía esta acusación constitucional era obviamente impedirme el ejercicio de mi cargo académico en la Universidad de Chile", afirmó el 25 de noviembre pasado el exministro de Energía, Diego Pardow, admitiendo su plan de retornar a las aulas de la Facultad de Derecho. Para ellos, sostiene un director de servicio que está pensando abrir su propia consultora, la reinserción laboral será



#### Comenzó reubicación

# Municipios, universidades y asesorías parlamentarias: opciones laborales de funcionarios boricistas

**Otros, con mayor dificultad, buscan trabajo en el sector privado.**

más fácil, así como para subsecretarios u otros altos cargos que el Gobierno podría proponer para Alta Dirección Pública, ya que el gobierno tiene solo 12 "balas de plata" para remover inmediatamente una vez que asuma. El resto, dicen, "se las están arreglando solos".

El exministro vocero y de Defensa del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Francisco Vidal, cuenta que en su momento, él volvió a hacer clases a la U. Alberto Hurtado. Hoy, comenta, el escena-

rio laboral es más complejo para los futuros exfuncionarios de Gobierno ya que "cada vez son menos fundaciones" y las universidades en general son más afines a la derecha, junto al cierre de instituciones como Arcis.

"Cuando llegó Boric, los exministros de Piñera se fueron a la U. San Sebastián, UDD, Adolfo Ibáñez, U. de los Andes y Autónoma. La derecha tiene una retaguardia para cuando salen sus cuadros mucho más amplia y ancha que la de izquierda", agrega Vidal, quien explica que "la principal retaguardia de los militantes de confianza política está en los municipios y en las universidades", con mayor restricción en este último caso para la izquierda.

José Antonio Viera Gallo fue ministro Segpres del primer Gobierno de Bachelet

y antes de que ganara Sebastián Piñera, fue nombrado ministro en el Tribunal Constitucional. "Algunos fueron a sus bufete de abogados, oficinas de ingenieros, empresas consultoras, otros a Naciones Unidas, universidades, etc (...). Cada cual buscó sus propias posibilidades", recuerda. Las opciones en organismos multilaterales son ahora más acotadas luego de que a comienzos de este mes EE.UU. anunciara que reduciría el financiamiento a Naciones Unidas, lo que impacta a organismos dependientes como Cepal y PNUD.

Otro exministro de Bachelet que prefirió mantener su nombre en reserva, dice que en la red de apoyo a las que algunos tienen acceso para buscar oportunidades laborales después del gobierno también opera un "sesgo" que favorece a los partidos más grandes. Y suma a los municipios, ong, universidades, organismos internacionales y cargos públicos no políticos -como el Consejo de Defensa del Estado, donde Bachelet nombró a Javiera Blanco antes de dejar el gobierno y Sebastián Piñera a Alberto Espina- otro destino laboral: los equipos de los nuevos parlamentarios. Ahí también hay quienes tienen un lugar asegurado después del 11 de marzo.

Todo esto en un contexto donde se han acusado intentos de "amarre" en cargos públicos, como por ejemplo el artículo 65 del proyecto de ley de reajuste de remuneraciones del sector público que permite al Presidente proponer al Senado los candidatos a consejeros de la Agencia de Protección de Datos ocho meses -en lugar de 60 días- antes de que la ley entre en vigencia (1 de diciembre de este año).